

Educación, Sociedad y Cultura

A cinco años del Estallido Social

por Dante Castillo* y Mario Torres**

Las masivas manifestaciones ciudadanas y los disturbios al orden público, que en el contexto chileno hemos bautizado como el "Estallido Social", se inicia y propaga desde los malestares de la esfera educativa. De hecho, todas las protestas sociales que se han registrado en los años de la postdictadura, nacen de las molestias y demandas de los actores educativos, principalmente del estudiantado de educación escolar y universitario.

Por otra parte, cada una de las movilizaciones estudiantiles se han traducido en cambios de políticas nacionales, que se buscan encontrar soluciones a las inequidades del modelo de desarrollo neoliberal y postindustrial. Es decir, para cada anomalía del sistema económico y social, denunciado desde la esfera educativa, las autoridades de turno han implementado ajustes al modelo.

Entre los ajustes más conocidos está el Crédito con Garantía Estatal (CAE), la actual Ley General de Educación (LGE), el fin al copago en centros educativos o la Ley de Gratuidad Universitaria. Pero lo más relevante de estas medidas es que todas han sido diseñadas, difundidas, instaladas e institucionalizadas en el mundo escolar y universitario, para acoplarse al modelo neoliberal. En el fondo, pese a lo disruptivo, contracultural y la ayuda que efectivamente proporcionan para los grupos sociales más pobres y desfavorecidos, la arquitectura de estas medidas se realiza sin alterar la génesis del neoliberalismo criollo. Prueba de lo anterior, se encuentra en el hecho que cada una de las medidas posteriores a las protestas iniciadas desde la educación, han sido acordadas con sectores liberales y conservadores de la Cámara de Diputados y Diputadas y del Senado que, reconociendo las anomalías del modelo, no se atreven a buscar reemplazo.

En este contexto y en esta tradición nacional, las únicas demandas que no se han traducido en ajustes de políticas educativas o sociales, han sido las enunciadas durante el Estallido Social. En una situación paradigmática, por primera vez una protesta ciudadana nacional y transversal, ha quedado sin respuesta de las autoridades políticas.

Haciendo historia, está consensuado que la causa inmediata o el detonante del Estallido Social, se relaciona con el alza en la tarifa del sistema de transporte público de Santiago, que se inició en la primera semana de octubre de 2019 y que en el caso del estudiantado se tradujo en un incremento de 30 pesos. Como protesta, los estudiantes secundarios realizaron

actos de evasión masiva en el Metro de Santiago, que al pasar de los días, aumentó la cantidad y el tipo de evasores. En paralelo, también comenzaron a registrarse incidentes dentro de las estaciones subterráneas del Metro.

Las manifestaciones se masificaron el día viernes 18 de octubre de 2019, cuando al movimiento del estudiantado secundario se les unieron de manera espontánea y multitudinaria, vastos sectores de la ciudadanía. Ese día las operaciones de la red del Metro de Santiago fueron cerradas y el enfrentamiento de la multitud con la policía se expandió por toda la capital.

La noche del viernes 18 de octubre aparecieron varios focos de protestas, saqueos y disturbios violentos en Santiago y en otros puntos del país. En la madrugada del día sábado 19 de octubre, el presidente Sebastián Piñera decretó estado de emergencia en las comunas del Gran Santiago y toque de queda para la población civil a partir de la noche del sábado. Pero debido a la magnitud de las manifestaciones, el toque de queda se extendió pocas horas después a otras cinco regiones del país y el día 23, el estado de emergencia había sido declarado en quince de las dieciséis capitales regionales de Chile.

Como un hecho inédito en la historia moderna chilena, el Estallido Social, iniciado en la tarde del 18 de octubre de 2019, se mantuvo con una serie de manifestaciones masivas, focalizadas y con disturbios que, originados por el estudiantado de Santiago, se propagaron a todas las regiones del país, hasta marzo de 2020. En otras palabras, solo las medidas sanitarias de enclaustramiento, con las que se

respondió a la pandemia de Covid-19, finalizó con las protestas callejeras.

Si bien para ciertos analistas, las protestas se caracterizaron por la ausencia de líderes lo más relevante fue la participación e incorporación activa de un amplio espectro social, desde la clase baja, media y la media alta. La explicación se encuentra en el hecho que, aunque la causa inmediata puede atribuirse al alza tarifaria del transporte público, las causas de fondo se asociaron al alto costo de la vida en Chile, las bajas pensiones de la población jubilada, los precios elevados de fármacos y el sistema y tratamientos de salud.

A lo anterior se agregaba un rechazo generalizado a toda la clase política que se percibía desconectada de la vida cotidiana de la ciudadanía, una sensación de abuso y el descrédito institucional, acumulado durante los últimos años 30 años de gestión pública.

Hoy, desde la distancia temporal, se deben considerar algunos aprendizajes que pueden ayudar en el futuro próximo. En primer lugar, el Estallido Social no se tradujo en ajustes a las anomalías sociales denunciadas por la mayor parte de la ciudadanía, basadas en su experiencia de vida cotidiana. Segundo, las demandas, aunque simples, requieren de una solución que no es viable en el actual modelo de desarrollo nacional. Tercero, la solución o más bien la apuesta que consensuó la clase política para responder a las demandas del Estallido Social, centrada en el cambio constitucional, fracasó en este propósito, pero permitió una salida negociada, en la que los partidos políticos asumían la dirección. En cuarto lugar, está el hecho que los indicadores y condiciones

de vida material que fuera denunciada y compartida por extensos sectores de la ciudadanía durante el Estallido Social, no han mejorado o bien han empeorado.

Actualmente, a las anomalías denunciadas por el Estallido Social, se le ha sumado la situación del narcotráfico, del crimen organizado y, de la corrupción de las autoridades económicas, políticas y sociales. Hechos que, al mismo tiempo, están atentando con la valoración y la legitimación de todos los procesos de enseñanza y de aprendizaje que promueven las instituciones educativas del país. Es decir, tal como señaló hace poco una rectora de una universidad pública, la escuela chilena está cotidianamente disputándole al narcotráfico los casi 50 mil niños, niñas y adolescentes que dejan anualmente de asistir a la sala de clases.

Por otra parte, también situados en un país clasista y conservador, aunque socialmente se busque calificar como corrupción a las acciones delictivas de los grupos de poder (políticos y económicos), para el imaginario colectivo es un crimen organizado de cuello y corbata. Lo peligroso de las distinciones clasistas, es que tienden a legitimar la organización para el delito y validar otras formas de ascenso social, más rápidas y al parecer más efectivas que la trayectoria educativa.

A cinco años del inicio del Estallido Social los principales indicadores educacionales están por debajo de los registrados en el 2019. Por ejemplo, ha aumentado el abandono escolar de escuelas y liceos regulares; se ha incrementado la educación de adultos, en la que asisten mayoritariamente niños, niñas y jóvenes atendidos por un currículum abreviado; la matrícula de las universidades públicas ha descendido a solo un 16% del total de estudiantes registrados en el sistema; varias universidades públicas están al borde de la quiebra financiera; la salud emocional o mental del estudiantado y del profesorado han retrocedido, debido a factores endógenos y exógenos que no tienen atención o se atienden para responder a agendas políticas cortoplacistas.

A modo de cierre, las condiciones económicas, sociales y culturales que estuvieron a la base del Estallido Social de 2019, siguen sin atenderse y por cada día que pasa continúan aumentando en magnitud. La convivencia y la cohesión social están muy tensionadas y la población podría volver a expresar sus inconformidades en la calle. La crisis de las compañías eléctricas, provocadas por los largos cortes de energía durante este invierno, dejaron entrever el terror de algunas autoridades y el hastío de la población. Ante este contexto, las instituciones educativas en general y las públicas en particular, deberían recibir un trato que las ubique en el lugar estratégico que tienen y no en un medio para corregir efectos negativos inmediatos de una economía sostenida en la inequidad. Por el momento, la educación sigue siendo la mejor forma de asegurar transformaciones culturales que se acoplen con políticas económicas progresistas. ■

*Investigador PIIE **Académico UTEM.



Marcela Yaconi, *Todos cabemos* (Técnicas mixtas), 2024
 (Exposición en Galería Patricia Reedy a partir del 9 de octubre)